



LOS EDILES DE SEIS COMUNAS MANTIENEN PROTECCIÓN POLICIAL EN TODAS SUS ACTIVIDADES.



Christopher White (PS), de San Bernardo.

Javier Reyes (PC), alcaldesa de Lo Espejo

Felipe Muñoz H. (PS), de Padre Hurtado.

Mario Desbordes (RN), de Santiago.

Claudia Pizarro (DC), de La Pintana.

Gustavo Toro (DC), de San Ramón.

17 HAN SIDO INTIMIDADOS GRAVEMENTE DURANTE SU GESTIÓN

DESDE CORONAS DE FLORES A QUEMA DE BUSES como advertencia: Un tercio de los alcaldes de la RM han recibido amenazas de muerte

36 de los 52 alcaldes de la Región Metropolitana han sido alguna vez amedrentados en los años que llevan a cargo de sus municipios. Las amenazas que más se repiten provienen de bandas narcotraficantes, aunque muchos no denuncian esta situación. Expertos sostienen que el mayor riesgo de las intimidaciones es que las autoridades se inhiban de ejercer su labor. | A. UGARTE, R. GONZÁLEZ y B. FUENZALIDA.

Desde coronas de flores en la puerta de la municipalidad hasta la quema de cinco buses y dos camiones de la alcaldía son parte de las amenazas que han recibido algunos de los alcaldes de la Región Metropolitana. Consultados por "El Mercurio" y luego de una revisión de las denuncias realizadas a la prensa por parte de los alcaldes, se pudo constatar que 36 de 52 ediles de las comunas de la región han sido amedrentados en el ejercicio de su cargo, seis de ellos tiene resguardo policial porque su integridad física está en riesgo y 17 han recibido amenazas de muerte durante su gestión.

Las advertencias que más se repiten son las atribuidas a bandas narcotraficantes: nueve alcaldes reconocen haberlas recibido, aunque algunos prefieren mantener esos antecedentes en reserva.

Las amenazas suelen intensificarse cuando las autoridades adoptan medidas contra el comercio ambulante, ordenan desalojos de tomas o intervienen frente a barras bravas y cacerías clandestinas.

Recientemente se conoció la denuncia de la alcaldesa de Lo Espejo, Javier Reyes (PC), luego de que bandas narcotraficantes ofrecieran \$100 millones por su cabeza como represalia ante las medidas adoptadas en contra del crimen organizado en su comuna.

Pero su caso está lejos de ser aislado y afecta a todo el espectro político. Luego de conocido el caso, un grupo de nueve ediles publicaron una carta titulada "Cuando amenazan a un alcalde, nos atacan a todos" y se reunieron con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección de los ediles.

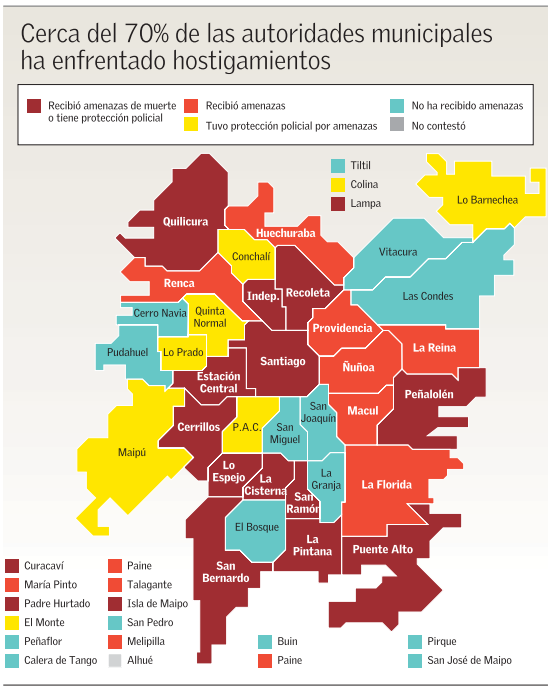
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad (ACHM), Gustavo Alessandri (RN), reconoció que son "siete alcaldes a nivel nacional" que tienen protección, por la verosimilitud del riesgo de que sean agredidos. Y es que los líderes comunales pueden denunciar las amenazas que reciben ante el Ministerio Público y acceder a protección policial si la fiscalía lo determina. Este resguardo implica contar con personal de Carabineros que escolta a los ediles en todas sus actividades.

Es el caso de la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro (DC), quien cuenta con protección desde 2017, luego de que recibiera amenazas de bandas de narcotráfico en la comuna.

En una situación similar se encuentra su par de San Ramón, Gustavo Toro (DC). Este último ha relatado episodios donde asegura que su vida y la de su familia ha estado en riesgo. Según ha señalado, ha sido objeto de amenazas directas, persecuciones en vehículos, encerronas e incluso disparos, en el contexto de acciones vinculadas al combate contra los narcos.

También cuenta con protección el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia (PS). Según explicó, desde agosto del año pasado, está bajo resguardo debido a amenazas de muerte que ha recibido través de redes sociales. "La verdad es que este tipo de cosas se han prácticamente normalizado hoy en día con las autoridades, en razón de la función que cumplimos, sobre todo en materia de seguridad. Lo que le queremos decir a estas personas es que no nos van a amedrentar", señala a este medio.

En tanto, Christopher White (PS), edil de San Bernardo, cuenta con esta medida hace cinco años. Explica que la mayoría de las amenazas que recibe están asociadas a grupos que pertenecen al comercio ambulante. En una



“Existe una cifra negra respecto de las amenazas que enfrentan alcaldes (y concejales) (...) son muchos los que han sido amenazados y no hacen la denuncia o no se conoce públicamente”.

ANDRÉS CHACÓN
DIRECTOR EJECUTIVO DE AMUCH

ocasión unos hombres a bordo de un vehículo se instalaron afuera de su casa y comenzaron a gritar en contra del edil y su familia. Relata que también ha recibido mensajes con la dirección de su domicilio y los horarios en los que entra y sale de su hogar.

El último episodio que vivió fue en 2025, cuando recibió una carta de amenaza en donde se leía "White, te vamos a matar a ti y a tu familia". Sostiene que "el costo ha sido también un cambio de vida para mi familia".

En la comuna de Santiago, encabezada por Mario Desbordes (RN), se desplegaron lienzos y panfletos en establecimientos educacionales con su imagen y la figura de una arma apuntándole, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. El edil cuenta actualmente con resguardo policial especial tras recibir amenazas de muerte.

Desbordes atribuyó las amenazas a "grupos minoritarios".

También hay otros casos donde el Ministerio Público optó por otorgar esta protección, pero los ediles la desestimarón. Así lo relata,

por ejemplo, Agustín Iglesias (ind., Independencia), quien dice que actualmente "no tengo la necesidad de protección porque las amenazas pararon".

El edil se opuso a la realización de un partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile en el estadio Santa Laura. "La Garra Blanca publicó un post en redes sociales, en el cual se me indicaba como un hinchita de la U y que por eso yo me oponía a este partido. Después, una persona me envió un WhatsApp con mi dirección y decía que si el partido no se jugaba me quemaba la casa". Igualmente cuando llegó al cargo contrató a personal con experiencia en seguridad de autoridades.

Fanes Jadue (PC, Recoleta) es otro que rechazó la protección policial y optó por "medidas de carácter más personales de resguardo". Cuenta que hace un año visitó La Vega Central, donde fue abordado por un grupo de personas de "manera violenta", que incluso lo amenazaron con un arma blanca.

EDILES QUE CONTARON CON ESCOLTA POLICIAL

En tanto, son otros ocho los ediles que en su momento contaron con protección policial. Hay relatos como el de la alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén (ind., PPD), quien cuenta que tras la destrucción de "narcocamaleones" por parte de la municipalidad, les quemaron "cinco buses, dos camiones y a mí me amenazaron por redes sociales". A raíz de este caso debió contar con protección policial durante 2025.

Por su parte, Felipe Alessandri (RN), alcalde de Lo Barnechea, también contó con esta medida en 2025, tras ser amenazado de muerte por el desalojo de la toma en el Cerro 18.

A ellos se suma Tomás Vodanovic (FA), el jefe comunal de Maipú, quien dispuso de res-

guardo durante un mes en 2023 luego de la clausura de la discoteca Don Oscar. En ese entonces recibió al menos cuatro mensajes en redes sociales donde le advertían que acabarían con su vida.

Pero no todos los episodios de amedrentamiento han derivado en escolta policial. En distintas comunas, las intimidaciones han surgido inmediatamente después de operativos, clausuras o desalojos.

En María Pinto, la alcaldesa Jessica Mualim (RN) asegura que, en su caso, los mensajes comenzaron tras ordenar la demolición de una vivienda en una toma, que sería de "personas que estaban relacionadas al tráfico de drogas". Según relata, el cabecilla de la banda vinculada al lugar "me mandaba mensajes desde la cárcel".

En Quilicura, Paulina Bobadilla (ind. ex-FA) describe que le han dejado coronas de flores en la puerta de la municipalidad.

"Cuando pedí militares para intervenir los puntos críticos de Quilicura para apoyar la falta de contingente policial, fotografiaron mi casa, publicaron la dirección y hasta la patente del auto en redes sociales", cuenta.

En Huechuraba, fuentes cercanas a Max Luksis (ind.) sostienen que este recibió cartas con amenazas en la puerta del municipio, en medio de tensiones que vinculan con integrantes de la Garra Blanca, dado que estos últimos pintan los postes de la comuna blanco y negro, y desde la municipalidad los vuelven a pintar azules, lo que coincide con los colores del equipo archirival.

En Peñalolén, Miguel Concha (FA) recibió amenazas de muerte tras ordenar el cierre de un candorero ilegal. En La Cisterna, Joel Olmos (ind.) ha sido intimidado con armas blancas durante operativos contra el comercio ambulante. Y en La Florida, Daniel Reyes (ind.) denunció mensajes en redes sociales luego del desalojo de la toma Dignidad, en octubre pasado: "Se nos intimidó con quemar la maquinaria a utilizar en el operativo y con agredir a los equipos con armas de fuego", explicó. En Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (ind.) fue amedrentado tras intervenciones municipales en el barrio Meigs. El edil sostuvo que en la oportunidad fue amenazado de muerte.

TIPIFICAR COMO DELITO LAS AMENAZAS CONTRA ALCALDES

Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, sostiene que el objetivo de una amenaza es la modificación de conductas: "Si una autoridad comienza a postergar fiscalizaciones, evita enfrentar ciertos focos o reduce su coordinación con policías por temor, entonces la amenaza ya cumplió su propósito. El riesgo mayor es la autocensura institucional. Cuando el crimen organizado logra alterar decisiones públicas mediante intimidación, comienza a ganar poder territorial real".

"Son muchos los alcaldes que son amedrentados pero que no denuncian o no se conocen públicamente", sostiene el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Andrés Chacón, y apunta a que "existe una cifra negra".

Destaca que es relevante tener un catastro real para "generar conciencia del impacto que tiene en un país que se intenta intimidar y coartar la acciones de una autoridad".

También anuncia que presentarán al nuevo gobierno una propuesta para tipificar como delito las amenazas contra alcaldes y concejales. "Nuestra iniciativa es que la protección a las autoridades comunales debe equipararse a la legislación que hoy resguarda a fiscales y otras autoridades expuestas, hay que perseguir a quienes los amenazan y buscar que paguen con cárcel".

Claudia Pizarro relata que el fiscal a cargo de la zona sur de la RM, Héctor Barros, implementó un sistema que permite que los alcaldes de esa zona puedan denunciar directamente ante la fiscalía a través de un *software* especialmente habilitado para ello.

Desde la ACHM, Gustavo Alessandri (RN), dice que impulsarán la creación de una oficina de apoyo legal para alcaldes y concejales amenazados. "Contarán con representación especializada en querrelas y con asesoría jurídica permanente frente a este tipo de situaciones. Nuestro mensaje es claro: quien se enfrente al crimen organizado y a las bandas violentas no puede quedar solo". ■